Suplemento del Registro Oficial

Año III- Quito, Jueves 5 de Febrero 2009 - Nº 522

No. 133-2006

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TERCERA SALA DE LO PENAL

Quito, 8 de junio del 2007; a las 11h00.

VISTOS: PRIMERO: JURISDICCION Y COMPETENCIA.- Esta Tercera Sala Penal tiene jurisdicción y competencia para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo que establece la Primera Disposición General de la Ley Refomatoria a la Ley Orgánica de la Función Judicial, publicada en el Registro Oficial No. 26 del jueves 26 de mayo del 2005, en concordancia con la resolución del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de fecha 7 de diciembre del 2005, publicada en el Registro Oficial No. 183 del 9 de enero del 2006, así como en virtud de la designación efectuada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia el 21 de noviembre del 2006 y legal posesión de los cargos.- SEGUNDO: VALIDEZ PROCESAL.- Revisado el procedimiento de la presente acción, no se advierte vicio u omisión de solemnidad sustancial que pudiera acarrear su nulidad; por lo que este Tribunal de alzada declara la validez de esta causa penal.- TERCERO: ANTECEDENTES PROCESALES.- Carlos Mesías Castro Rosero interpuso dentro de término el recurso de casación de la sentencia pronunciada por el Tribunal Segundo de lo Penal de Tungurahua el 19 de octubre del 2005, a las 11h00, que le impone la pena de doce años de reclusión mayor ordinaria en calidad de autor responsable de la violación sexual a Vanesa Estefanía Paucar Chamorro, menor de doce años de edad a la fecha del ilícito, sustentando el fallo en los artículos 512 numeral 1 y 513 del Código Penal reformado por Ley 2001-47 que se publica en el Registro Oficial No. 422 de 28 de septiembre del 2001, aplicando al caso el artículo 514 ibídem porque los juzgadores aducen que la víctima ha sufrido una grave perturbación en su salud. Concedido el recurso y sorteada la causa, su conocimiento correspondió a esta Sala, competente por lo mismo para conocer y resolver la casación. CUARTO: FUNDAMENTACION DEL RECURSO.- En cumplimiento a lo que disponen los artículos 352 y 353 del Código de Procedimiento Penal, el recurrente ha fundamentado el recurso de casación en escrito que se agrega al cuaderno de la Sala en el que manifiesta que el Tribunal Penal aplicó falsamente los artículos 512 numeral 1 y 513 del Código Penal, tampoco observó lo dispuesto en el artículo 304-A del Código de Procedimiento Penal porque de lo contrario por no existir motivación ni certeza sobre su responsabilidad debía ser absuelto, por cuanto el delito no lo cometió el recurrente sino una persona llamada Henry Silva; tampoco se aplicó a su favor el principio in dubio pro reo que permitía su absolución de conformidad con el artículo 4 del Código Penal que no fue tomado en cuenta. Alega también que el Tribunal Penal obró en abierta contradicción con el artículo 24 numeral 13 de la Constitución Política, porque no es motivación aceptar pruebas que carecen de eficacia probatoria vulnerando las garantías constitucionales establecidas en el artículo 24 numeral 5 de la Carta Magna en concordancia con el artículo 80 del Código de Procedimiento Penal.- QUINTO: DICTAMEN FISCAL.- El Ministro Fiscal General del Estado contestó el traslado que le corrió con el escrito de fundamentación, al tenor de lo dispuesto por el artículo 355 del Código de Procedimiento Penal, expresando en el dictamen que examinada la sentencia dictada por el Tribunal Segundo de lo Penal de Tungurahua encuentra justificado que la víctima tenía menos de 12 años a la fecha del delito, nacida el 12 de abril de 1993, habiéndose conocido el acto punible por denuncia tanto de la Directora de la Escuela Eduardo Mera de Ambato donde estudia la ofendida así como de la tía política María Concepción Chamorro Pazmiño; agrega también que ante dicho Tribunal han prestado sus testimonios la Dra. Maura Dolores Villagómez que realizó el reconocimiento médico-ginecológico de la menor sosteniendo en su informe que la examinada presenta desgarro de membrana himeneal y una excoriación superficial de un centímetro de longitud a nivel de periné; conclusiones que ratifica en la etapa del juicio con lo que se comprueba la existencia del delito de violación sexual. Así mismo alude a los testimonios que han rendido la directora de la escuela Bélgica Cumandá Morales Machado donde estudia la víctima y la profesora Carmen Yolanda Ramos Duarte, quienes son unánimes en expresar que Vanesa Estefanía Paucar Chamorro se presentó ante ellas desesperada y llorando contándoles que su padrastro Carlos Castro desde pequeña le abusa sexualmente, por lo que no quería regresar a la casa, ante lo cual la condujeron a la Dinapen.- En el mismo sentido ha testimoniado el psicólogo Dr. Paul Marlon Mayorga Lascano quien entrevistó a la ofendida, circunstancia en la que le refirió que fue violada por su padrastro Carlos Castro Rosero. En el dictamen fiscal también se hace referencia al testimonio que ha rendido el acusado ante el Tribunal Penal, negando toda responsabilidad y atribuyendo la autoría de la violación a Henry Silva, que es un niño primo de la menor y de su misma edad.- En ese mismo sentido, y contradiciendo sus versiones sostenidas ante algunas personas, la menor ha negado que su padrastro sea el culpable de la violación y coincidiendo con la declaración de este último señala a su primo ser el causante del acto, ocurrido en el pueblo Puñiagra de Facundo Vela en circunstancias que jugaban al papá y la mamá.- Concluye el Ministro Fiscal General señalando que en los delitos sexuales el criterio de apreciación de la prueba es mucho más amplio porque se considera que “nunca existirá prueba directa, testigos presenciales u otra clase de medios de convicción”.- Por lo que pide a la Sala rechazar por improcedente el recurso de casación.- SEXTO: ANALISIS DE LA SALA Y RESOLUCION.- 1).- El recurrente ha expresado que el Tribunal Segundo de lo Penal de Tungurahua en la sentencia aplicó falsamente los artículos 512 numeral 1 y 513 del Código Penal así como el artículo 304-A del Código de Procedimiento Penal, pues habiéndose

establecido que el responsable de la violación de la menor fue su primo Henry Silva, sin embargo se le condenó cuando lo procedente era dictar el fallo absolutorio. Agrega también que la sentencia contraviene lo dispuesto por el artículo 24 numeral 13 de la Constitución Política de la República por cuanto la falta la motivación al aceptar pruebas que carecen de eficacia jurídica y vulnerar la garantía constitucional establecida en el artículo 24 numerales 2 y 5 ibídem en concordancia con el artículo 80 del Código de Procedimiento Penal. Tampoco el Tribunal Penal ha aplicado en su favor el artículo 4 del Código Penal que instituye el principio in dubio pro reo, aparte de que no ha observado en el fallo el contenido del artículo 304-A del Código Procesal Penal debido a que en el proceso no se comprobó con certeza su responsabilidad penal o por lo menos existe duda sobre ello, por lo cual debía dictar sentencia absolutoria.- 2).- El recurrente no objeta la existencia material del delito de violación sexual, que por la edad de la víctima se encuadra en el artículo 512 numeral 1 sancionado conforme el artículo 513, ambos del Código Penal a la pena de reclusión mayor extraordinaria de 12 a 16 años; esta última disposición fue sustituida mediante Ley 2001-47, promulgado en el Registro Oficial No. 422 de 28 de septiembre del 2001 vigente a la época en que se perpetró el ilícito.- 3).- De acuerdo con la prueba testimonial y pericial examinada en el fallo del Tribunal Penal, receptada durante la audiencia reservada de juzgamiento se concluye que los juzgadores llegaron a la certeza de que Carlos Mesías Castro Rosero es el autor responsable del delito; en consecuencia, descartada la inocencia del recurrente, sobre todo porque no está probada de manera plena la participación delictiva del supuesto violador Henry Silva, aseveración sostenida sin fundamento por la ofendida y su padrastro, los juzgadores estaban obligados a pronunciar sentencia condenatoria. Esta resolución se encuentra motivada por lo que no existe violación de las normas constitucionales y legales previstas en los artículos 24 numeral 13 de la Constitución Política de la República y 304-A del Código de Procedimiento Penal.- 4).- La Sala observa que el Tribunal Penal ha agravado la pena aplicando el artículo 514 del Código Penal reformado por la Ley No. 2001-47 vigente a la fecha de la infracción, aduciendo que la menor ha sufrido “una grave perturbación en la salud” según así lo señala el perito psicólogo en sus observaciones; más esta circunstancia agravante debe ser demostrada con exámenes médicos profundos mediante especialistas, pericia que en el caso no se ha realizado, motivo por el cual no es admisible la aplicación del indicado artículo 514 del Código Penal en perjuicio del recurrente.- 5).- Además, los presupuestos fácticos que sustentan la sentencia no originan dudas ni sobre el acto punible ni respecto de la autoría, por lo que resulta inaplicable al caso el principio in dubio pro reo incorporado al artículo 4 del Código Penal.- 6).- En definitiva, el acervo probatorio descrito en la sentencia permite concluir que el delito perpetrado es el de violación sexual que se encuadra en el artículo 512 numeral 1 del Código Penal cuya sanción está prevista en la primera parte del artículo 513 ibídem, que a la fecha del cometimiento del acto era de reclusión mayor extraordinaria de 12 a 16 años, la que debe modificarse en virtud de las atenuantes legalmente justificadas.- Por estas consideraciones, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, aceptando en parte el recurso de casación se impone a Carlos Mesías Castro Rosero, del estado y condiciones que constan en la sentencia recurrida, la pena de 8 años de reclusión mayor ordinaria como autor responsable del delito de violación sexual a una menor de edad, deduciendo el tiempo que hubiere permanecido privado de la libertad por esta misma causa. Devuélvase el proceso al Tribunal de origen para los fines de ley. Notifíquese.

Fdo.) Dres. Jaime Chávez Yerovi, Guido Garcés Cobo, Hernán Ulloa Parada, magistrados.- Certifico. f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

Certifico: Que las cinco (5) fotocopias que anteceden son iguales a su original.- Quito, 31 de julio del 2007.

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.